

**Id. Cendoj:** 47186370022014100269

**Órgano:** Audiencia Provincial

**Sede:** Valladolid

**Sección:** 2

**Nº de Resolución:** 278/2014

**Fecha de Resolución:** 01/09/2014

**Nº de Recurso:** 465/2014

**Jurisdicción:** Penal

**Ponente:** MIGUEL ANGEL DE LA TORRE APARICIO

**Procedimiento:** PENAL - APELACION PROCEDIMIENTO ABREVIADO

**Tipo de Resolución:** Sentencia

**Resumen:**

ABANDONO DE FAMILIA

**Idioma:**

Español

---

**AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2**

**VALLADOLID**

SENTENCIA: 00278/2014

**AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2 de VALLADOLID**

Domicilio: C/ ANGUSTIAS S/N

Telf: 983 413475

Fax: 983 253828

**N.I.G.:** 47186 43 2 2012 0624801

**ROLLO:** APELACION PROCTO. ABREVIADO 0000465 /2014

Juzgado procedencia: JDO. DE LO PENAL N. 1 de VALLADOLID

Procedimiento de origen: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000218 /2013

RECURRENTE: Humberto

Procurador/a: PAULA MARGARITA MAZARIEGOS LUELMO

Letrado/a: \*\*\*\*\*

RECURRIDO/A: MINISTERIO FISCAL,                      Fidela

Procurador/a: , JORGE RODRIGUEZ-MONSALVE GARRIGOS

Letrado/a: , \*\*\*\*\*

**SENTENCIA nº 278/2014**

=====

Ilmos. Sres. MAGISTRADOS:

D. FELICIANO TREBOLLE FERNANDEZ

D. FERNANDO PIZARRO GARCIA

D. MIGUEL ANGEL DE LA TORRE APARICIO

=====

En VALLADOLID, a uno de Septiembre de dos mil catorce.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valladolid, ha visto en grado de apelación, el presente procedimiento penal abreviado nº 218/13 del Juzgado de lo Penal 1 de Valladolid, por delito de abandono de familia por impago de pensiones, seguido contra Humberto . Han sido partes: como apelante, el referido acusado, representado por la procuradora Sra. Mazariegos Luelmo y defendido por el letrado \*\*\*\*\*; y como apelados: el Ministerio Fiscal en la representación que le es propia y la acusación particular ejercida por Fidela , bajo la representación del procurador Sr. Monsalve Garrigós y la asistencia letrada de \*\*\*\*\*

Es ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. MIGUEL ANGEL DE LA TORRE APARICIO.

**ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.-** En el Juzgado de lo Penal nº 1 de Valladolid, con fecha 11/03/2014, se dictó sentencia en el procedimiento de que dimana este recurso declarando probados los siguientes hechos:

*" ÚNICO .- Resulta probado y así se declara que por Sentencia de 30 de marzo de 2000 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Valladolid en los autos de Divorcio nº 225/1999 se acordó el divorcio del hoy acusado Humberto y Fidela y se fijó una pensión alimenticia a favor de los hijos menores de ambos y a abonar por el padre de 512,28 euros al mes, actualizada en el Auto del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de 19 de mayo de 2011.*

*Que pese a conocer el acusado la obligación de pago que le incumbía, el mismo no ha abonado las pensiones correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, agosto, noviembre y diciembre de 2011, todas las del año 2012 y las correspondientes a enero a*

marzo de 2013 y ello pese a que ha dispuesto de medios suficientes para ello por desempeñar una actividad laboral que en los años 2011 y 2012 le suponía unos ingresos mensuales de 1.000 euros."

**SEGUNDO.-** La expresada sentencia, en su parte dispositiva, dice así:

*"Que debo condenar y condeno a Humberto como autor responsable criminalmente de un delito de abandono de familia, ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de SEIS MESES DE PRISIÓN y accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y que indemnice a Fidela en la cantidad de 6.337,92 euros por las pensiones debidas de octubre de 2011 a septiembre de 2012 y en la cantidad de 3.276,72 euros por las pensiones de octubre de 2012 a marzo de 2013, con el interés del art. 576 de la LEC , imponiendo al condenado el pago de las costas procesales incluidas las de la acusación particular."*

**TERCERO.-** Notificada mencionada sentencia, contra la misma se formalizó recurso de apelación por la representación procesal de Humberto , que fue admitido en ambos efectos y practicados los traslados oportunos se presentó escrito de impugnación por el Ministerio Fiscal y por la representación de la acusación particular. Elevadas las actuaciones a este Tribunal y no habiéndose propuesto diligencias probatorias, al estimar la Sala que no era necesaria la celebración de la vista para la correcta formación de una convicción fundada, quedaron los autos vistos para sentencia, previa deliberación.

## HECHOS PROBADOS

Se modifica parcialmente el relato de hechos probados de la sentencia de instancia, quedando redactados del siguiente modo:

Por sentencia de 30 de marzo de 2000, dictada por el Juzgado de primera instancia nº 3 de Valladolid , en los autos de divorcio 225/1999, se acordó el divorcio del acusado Humberto y Fidela , fijándose una pensión alimenticia a favor de los hijos de ambos ( Elisenda y Bienvenido ) y a abonar por el padre de 512,28 euros actualizada mediante Auto del Juzgado de primera instancia nº 1 dictado el 19 de mayo de 2011.

Siendo conocedor de esta obligación de pago que le incumbía, el acusado, tras abonar el 1 de junio de 2011 la cantidad de 17.670,60 euros en concepto de pensiones atrasadas, tan solo realizó tres ingresos en dicho concepto: uno en julio de 2011 de 512,28 euros, otro el 19 de septiembre de 2011 de 512,28 euros y otro el 23-9-2011 por el mismo importe de 512,28 euros; sin que haya efectuado más abonos quedando impagadas por completo las pensiones desde octubre de 2011 hasta marzo de 2013, y ello a pesar de que tenía medios económicos o bienes suficientes para abonar en alguna medida y siquiera parcialmente tales pensiones.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO.-** La sentencia condena a Humberto como autor de un delito del artículo 227 del Código Penal , de abandono de familia por impago de las pensiones establecidas judicialmente a favor de sus hijos Elisenda y Bienvenido , habidos del matrimonio con Fidela , imponiéndole la pena de seis meses de prisión. En concepto de responsabilidad civil, se establece la obligación de indemnizar en la cantidad de 6.337,92 euros por las pensiones debidas de octubre de 2011 a septiembre

de 2012 y en la cantidad de 3.276,72 euros por las de octubre de 2012 a marzo de 2013.

Frente a dicha resolución se formula recurso de apelación por la defensa del citado acusado, a través del cual alega error en la valoración de la prueba e infracción del artículo 227 del C. Penal por su indebida aplicación, al entender acreditada la falta de capacidad económica del mismo para satisfacer dichas pensiones, por todo lo cual solicita la absolución con todos los pronunciamientos favorables.

**SEGUNDO.-** El delito de abandono de familia en su modalidad de impago de prestaciones económicas establecidas en convenio o resolución judicial, previsto y penado en el artículo 227-1 del Código Penal, se consuma mediante un comportamiento de simple omisión, constituido por el incumplimiento de la obligación pecuniaria durante los plazos que el artículo citado establece requiere, y por la conciencia y voluntad del sujeto activo de la realización del injusto penal típico, con lo que cualquiera cuestiones que se susciten sobre la imposibilidad de su cumplimiento por carecer de recursos para realizar el pago o por la concurrencia de un estado de necesidad no intencionado, que excluyen la responsabilidad penal, deben ser debidamente probadas por quien las invoca.

I.- En el presente caso, los elementos objetivos del referido tipo de impago de pensiones aparecen efectivamente acreditados, sin que sobre ello se suscite controversia.

Existe resolución judicial, primero en sentencia de separación y luego en la de divorcio, decretando la obligación del acusado de abonar la pensión alimenticia a favor de sus hijos Elisenda y Bienvenido por un importe de 512,28 euros mensuales en las fechas que nos ocupan.

Así mismo consta que tras abonar el 1 de junio de 2011 la cantidad de 17.670,60 euros a fin de satisfacer las pensiones alimenticias atrasadas, para lo cual pidió un préstamo como se indicará más adelante, con posterioridad únicamente realizó tres ingresos por el importe de 512,28 euros, uno en julio de 2011 y dos en septiembre de 2011. Así consta a los folios 27 a 29. Desde octubre de 2011 hasta marzo de 2013 (periodo que comprende este proceso) no efectuó ningún pago ni siquiera parcial para sufragar esas pensiones alimenticias a favor de los hijos.

El reflejo en los hechos probados de los periodos de impagos deben ajustarse a estos datos que se corresponden, por otro lado, con los pronunciamientos acordados en lo relativo a la responsabilidad civil de la sentencia de instancia.

Por lo tanto, el acusado ha dejado de pagar durante más de dos meses consecutivos la prestación económica a favor de sus hijos establecida en resolución judicial dictada en proceso de divorcio.

II.- Centrado nuestro examen sobre el requisito subjetivo del cito tipo penal, el recurrente sostiene que no ha habido por su parte voluntad de impago de dichas prestaciones sino que no ha podido satisfacerlas al carecer de medios económicos para ello.

Del conjunto de las pruebas practicadas en este proceso, podemos concluir que el acusado tenía medios o bienes suficientes al menos para realizar algunos pagos parciales de tales pensiones, pese a lo cual se mantuvo desde octubre de 2011 hasta marzo de 2013 sin hacer abono alguno; por lo que cabe apreciar una cierta voluntad de impago con arreglo a lo expuesto y razonado en la presente resolución.

Humberto explota el negocio bar Trapecio. Aunque ha visto reducido el nivel de beneficios de su negocio, como se comprueba con la manifestación y documentación aportada, sin embargo indica que obtiene unos ingresos netos que no superan los 1.000 euros.

No desconocemos que tiene que hacer frente a la hipoteca de su vivienda y plaza de garaje (454 euros al mes), a un préstamo pedido para pagar pensiones anteriores a junio de 2011 (364 euros al mes) y a una cantidad de 45 euros al mes para otro préstamo suscrito para hacer frente a costes del negocio. Es cierto que siendo ello así, las posibilidades económicas del acusado serían escasas.

No obstante, el Sr. Humberto cuenta también con diversas propiedades. Al margen de su vivienda y plaza de garaje en la C/ PASEO000 n° NUM000 de Valladolid, es propietario único de tres inmuebles en la localidad de Navalacruz (Ávila): un solar de 248 m2, en la C/ DIRECCION000 n° NUM001, una parcela almacén en la C/ DIRECCION001 n° NUM002 de 53 m2, y otro solar pequeño de 26 m2 en la C/ DIRECCION002 n° NUM003 del mencionado pueblo.

Por lo tanto, son propiedades que algún valor poseen, aunque no sea muy elevado, como se desprende de las referencias a los valores catastrales recogidas en la documentación relativa a los mismos (concretamente, 10.520 euros por el primer inmueble, 2.867 euros por el segundo y 761 euros por el tercero).

Pues bien, respecto de tales bienes no consta que el acusado haya intentado ponerlos en venta a fin de atender con su producto las pensiones de sus hijos, ni tampoco ofrecerlos o transmitirlos a éstos en pago de dichas prestaciones, lo cual hubiera evidenciado una actitud y voluntad tendente a cumplir en alguna medida esas obligaciones familiares que, como se indica en la sentencia, tienen un carácter preferente.

Igualmente es de observar cómo el recurrente no presenta modificación de medidas ante la jurisdicción civil sino hasta julio de 2013 en la que solicita la extinción de la pensión en cuanto a Elisenda y la reducción de la pensión sobre Bienvenido a la cantidad de 200 euros mensuales (folios 185 a 194), con lo que incluso mediante dicho planteamiento viene a admitir que se encuentra en condiciones de abonar alguna cantidad, aunque solo sea esos 200 euros mensuales, importe que tampoco ha venido aportando a lo largo de esos años 2012 y 2013.

En consecuencia, hemos de mantener el pronunciamiento de condena al concurrir en la conducta del acusado los elementos objetivos y subjetivos que integran el delito de impago de pensiones, tipificado en el artículo 227 del Código Penal.

**TERCERO.-** Ahora bien, dado el carácter omnicomprendivo del recurso, consideramos que la pena privativa de libertad impuesta debe ser matizada y rebajada al mínimo previsto en el artículo 227 del Código Penal, esto es: a la de tres meses de prisión, teniendo en cuenta que efectivamente los ingresos del acusado procedentes de la explotación del negocio se habían reducido y que la hija mayor Elisenda, de 24 años, ha trabajado de forma esporádica obteniendo algún tipo de ingresos en ese período, lo cual constituyen circunstancias que han ponderarse a la hora de efectuar el reproche penológico frente al mismo.

En este sentido, procede modificar la sentencia de instancia, debiendo declararse de

oficio las costas de esta alzada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

## **F A L L O**

Que estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por don Humberto , contra la sentencia de fecha 11 de marzo de 2014 dictada en el Procedimiento Abreviado n° 218/2013 del Juzgado de lo Penal n° 1 de Valladolid , se revoca parcialmente la misma en el exclusivo sentido de reducir la pena impuesta a Humberto a la de tres meses de prisión, manteniéndose el resto de sus pronunciamientos.

Las costas de esta alzada se declaran de oficio.

Notifíquese la presente Resolución a las partes, haciéndoles saber que es firme y contra la misma no cabe interponer recurso ordinario alguno.

Remítase testimonio de la presente al Juzgado de procedencia, junto con los autos, para su cumplimiento, y una vez se reciba su acuse archívese el presente, previa nota en los libros.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.